

Participación familiar: Reto para las políticas públicas nacionales de niñez y familia

**Por: Sandra Gabriela Burgos López
Maestría en Estudios de Familia
Trabajo final
2020/2021**

Resumen

En el discurso formal de las políticas públicas, las familias son reconocidas como actores sociales relevantes dada su capacidad de convocatoria y respuesta. Por ello, cada vez despierta un mayor interés en la institucionalidad que las familias tomen parte en la gestión de lo público. No obstante, promover y garantizar la participación familiar no solo implica involucrar a personas sino a sujetos colectivos, tampoco pasa únicamente por el cumplimiento de funciones familiares, sino que también conlleva el aseguramiento de condiciones y garantías.

Este documento plantea un análisis de contenido cualitativo de las políticas públicas nacionales de niñez (primera infancia e infancia y adolescencia) y de apoyo y fortalecimiento a las familias, en torno a las nociones de: familia, participación y participación familiar.

A partir del análisis realizado se develan posibles implicaciones de las comprensiones identificadas, y se proponen algunas recomendaciones para cualificar la garantía y realización del derecho de participación familiar en el marco de la gestión de las políticas públicas.

¿Por qué revisar la participación familiar?

La participación efectiva se entiende como expresión de dignidad y libertad humanas, instrumento para la expansión de los demás derechos reconocidos y, en tanto permite construir entre todos relaciones de convivencia en igualdad, inclusión y justicia, sustrato de la democracia.

En Colombia, dando cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, el Estatuto de la Participación Democrática establece obligaciones para el Estado en torno a la garantía de bases fundamentales¹.

Por su parte, la Ley de Protección Integral a la Familia, asume la participación como uno de los principios, y dispone que el Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio pleno del derecho a la participación y representación de sus miembros (artículos 3 y 4, Ley 1361 de 2009).

Por estas razones, así como por intereses funcionales, de manera constante y creciente, desde distintos sectores administrativos del Estado Colombiano (educación, salud, social, etc.) se ha dispuesto como criterio de conducta promover y garantizar que las familias tomen parte en la gestión de lo público: respondan, opinen, representen y, algunas veces, definan.

Ahora bien, siendo las políticas públicas instrumentos conceptuales, procedimentales y materiales para alcanzar los fines y cumplir las obligaciones del Estado², es esperable que el logro de la garantía y realización del derecho de participación familiar deba considerarse y orientarse desde dicho contexto.

De otra parte, desde hace algún tiempo se viene identificando la necesidad de articular e integrar las políticas públicas poblacionales. En tal sentido, en su herramienta de gestión central, el gobierno nacional actual ha dispuesto de manera explícita el imperativo de “*armonizar*” la implementación y gestión territorial de las políticas públicas dirigidas al desarrollo integral de la

¹ Ley 1757 de 2015. Artículo 110. Obligaciones del Estado. “*El Estado garantizará las bases fundamentales de la democracia a través de la libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía, formación, fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así como la institucionalización de mecanismos, instancias, y estrategias de participación; no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación sobre la participación, entre otros.*”

² “*Son fines esenciales del Estado... facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...*” (Art. 2, Constitución Política Nacional de Colombia, 1991).

niñez y al fortalecimiento de las familias³. Siendo así, habiendo necesidad de identificar posibles ejes articuladores, el tema de la participación puede ser examinado con ese propósito.

A partir del anterior conjunto de consideraciones, en el presente documento: se explicita la metodología empleada para el tratamiento de la información procedente de los documentos objeto de análisis (1); se revisan las referencias relativas a familia, participación y participación familiar inmersas en las políticas públicas nacionales de niñez y familia (2); se aportan elementos en la comprensión de lo que implica la participación familiar como proceso de empoderamiento y herramienta de gestión (3); se presentan de manera explícita las conclusiones extraídas del trabajo de análisis realizado (4) y, finalmente, se proponen recomendaciones para favorecer la garantía y realización del derecho de participación familiar, en el marco de las políticas públicas (5).

1. Volver sobre lo escrito: La metodología empleada

Una vez identificado como problema de política pública la garantía del derecho de las familias a intervenir efectivamente en las decisiones que les afectan, las preguntas de base para avanzar en el análisis del contexto de lo dispuesto en las políticas públicas nacionales de niñez y familia fueron: *¿Cómo se concibe el derecho de participación de las familias en tales políticas?; ¿Qué implica garantizar la participación del sujeto colectivo?; ¿Cómo podría la participación contribuir en el propósito de armonización de políticas públicas nacionales de niñez y familia?*

Krippendorff (1990, p 28 citado por Andréu, J. 2002) define el análisis de contenido como “*una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto*” (p.3).

³ La Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo PND 2018 – 2022) dispone la armonización de Política Nacional de Infancia y Adolescencia – PNIA (2018 - 2030) y la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias – PPNAFF (2018 - 2030) (Bases PND 2018 – 2022, p. 248 y 449). Refiriéndose a la política nacional de familia, se indica expresamente que “*Esta política debe fortalecer a las políticas desde la infancia a la juventud*” (Bases PND 2018 – 2022, pp. 255 y 442).

El análisis de contenido busca captar significados para establecer inferencias. Hacer visibles características del orden, jerarquía, significación y uso de las unidades de análisis en el texto, de manera que se puedan identificar correspondencias, coherencias y contradicciones entre los tópicos de interés.

La base del presente artículo es un análisis de contenido de tipo cualitativo a partir de la revisión, sistematización e interpretación de aquellos textos donde de manera formal se plasman las políticas públicas nacionales vigentes de niñez y familia, así como literatura de referencia.

Las unidades de análisis fueron las referencias a: (Familia), (Participación) y (Participación Familiar). Las categorías para organizar los datos fueron la presencia u omisión de cada unidad de análisis en el texto, su definición, ubicación o importancia, así como las connotaciones funcionales dadas a las mismas en términos de rol o pragmática.

Finalmente, consolidada la trama de datos construida a partir de la exploración, descripción e identificación de comprensiones, se contrastaron los hallazgos con posturas teóricas pertinentes para proponer recomendaciones.

2. Familia, participación y participación familiar en las políticas públicas nacionales de niñez y familia

La Convención de los Derechos del Niño – CDN (ONU, 1989) define “*niño*” como “*todo ser humano menor de dieciocho años de edad*”. En tal sentido, para ese grupo poblacional en la actualidad existen en nuestro país dos políticas públicas nacionales definidas: La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia – PNIA (2018 – 2030).

La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “de Cero a Siempre” - (Colombia, 2016) *“busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho”*. (art.1).

En complemento, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia (Colombia, 2018) tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, entre los 6 y los 18 años de edad, y para ello declara como objetivo general *“generar las condiciones de bienestar y acceso a oportunidades con equidad e incidencia de niñas, niños y adolescentes en la transformación del país”* (p.30).

Por su parte, la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2018 - 2030 (PPNAFF, Colombia 2018) pretende *“desde la perspectiva de derechos, brindar orientaciones generales para la acción del Estado en torno a la comprensión, movilización social y gestión política, con miras a promover el apoyo y fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo humano y social en todos los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en un sentido amplio, plural y diverso”* (p.6). Para ello, define como objetivo general: *“Reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social.”* (p.17).

En general, en el discurso formal las políticas públicas nacionales de niñez y familia coinciden en: a) El reconocimiento de las familias como *Sujetos Colectivos de Derechos*; b) El valor estratégico otorgado a la *Participación*, y c) la reiterada alusión a la *Corresponsabilidad* como principio orientador. No obstante, estos tres aspectos presentan diferencias en las políticas en comento.

A continuación, con el fin de favorecer la comparación de las comprensiones identificadas, se exponen y comentan algunos de los textos de las políticas públicas nacionales de niñez y familia, organizados en las unidades de análisis definidas: (Familia), (Participación) y (Participación Familiar). En complemento, en documento anexo se presenta una síntesis de las principales referencias señaladas⁴.

2.1 Referencias a la noción de familia

Como puede observarse, las políticas públicas nacionales de niñez y familia coinciden en el reconocimiento de las familias como sujetos colectivos de derechos, sistemas con diversas y cambiantes configuraciones, así como unidades sociales con importantes capacidades para la protección de sus integrantes y para la transformación de su contexto.

REFERENCIAS A LA NOCIÓN DE FAMILIA
<p>De Cero a Siempre (Colombia, 2016)</p> <p><i>“La educación inicial ... se concibe como un proceso educativo y pedagógico ... a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial ..., contando con la familia como <u>actor central</u> de dicho proceso” (art. 5)</i></p> <p><i>“se toma en consideración la <u>diversidad</u> de configuraciones de niños, niñas y familias en razón de su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, ...” (art. 6)</i></p> <p><i>“Gestión intersectorial para la atención integral. Es la acción... a través de la cual los sectores estatales ..., así como otros <u>actores de la sociedad</u> (familias, comunidad, sociedad civil, ...), se articulan para lograr la atención integral a las mujeres gestantes, y los niños y niñas en primera infancia, a partir de lo que ellos y ellas requieren.” (art. 7).</i></p> <p>Desde la estrategia, se considera que <i>“La familia cuenta con un conjunto de atributos que la configuran como tal, que hacen referencia a su condición como <u>sujeto colectivo de derechos</u>, como sistema dinámico, y al conjunto de funciones y roles que sus miembros y ella cumplen”, “<u>mediadora</u> de los procesos de inclusión social” y “<u>unidad con autodeterminación</u>” (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013; p. 118).</i></p>
<p>PNIA (Colombia, 2018)</p> <p><i>“La familia se concibe como <u>sujeto colectivo de derechos</u> y <u>agente político</u> al constituirse como una <u>unidad</u>, red de relaciones y de vínculos primarios y fundamentales del desarrollo humano. La PNIA asume a las familias en su carácter de sujetos en un sentido <u>plural y diverso</u>. En esta comprensión, las familias tienen un papel protagónico</i></p>

⁴ Apéndice A: Referencias sobre noción de Familia, Participación y Participación familiar, identificadas en las Políticas Públicas Nacionales de Niñez y Familia.

con capacidad transformadora para la promoción de los proyectos de vida individual y colectiva de sus integrantes, así como del desarrollo social y comunitario. (p.26)

La “construcción del sentido de la familia” se asocia con el entorno hogar (p. 37).

PPNAFF (Colombia, 2018)

“reconoce a las familias como sujetos colectivos de derechos, no integradas únicamente por vínculos de consanguinidad, sino por aquellos vínculos afectivos que las configuran como sistemas vivos, escenarios de cuidado, reconocimiento y desarrollo, comprendidas desde la pluralidad y la diversidad.” (p. 10)

Refiere las interpretaciones que de la CPN (1991) han hecho las altas cortes: “... una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución” (Consejo de Estado, 11 de julio de 2013). (p.10)

“Las familias se conciben en esta política como: Sujetos colectivos de derechos con capacidad de agencia..., Agentes transformadores que ... aportan al desarrollo de los proyectos de vida individual de sus integrantes, así como al desarrollo social y comunitario...; Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones en constante proceso de autorregulación y desarrollo ...” (pp.10 y 11)

“Reconocer a las familias como titulares de derechos, corresponsables económicos, sociales y culturales y como interlocutores activos...”. (p.18)

Sobre este aspecto cabe destacar que, más allá de la dimensión de co-creación de una identidad común, en términos prácticos la noción de sujeto colectivo implica para las familias constituirse desde la pluralidad y ser, a la vez, titulares de garantías y funciones. Es decir, tener capacidad reconocida para ejercer derechos, así como para contraer obligaciones.

2.2 Referencias a la noción de participación

En el discurso formal de las políticas de niñez y familia, la participación reviste una importancia estratégica en tanto se le designa como “*estructurante*”, “*principio*”, “*línea de acción*” o “*proceso transversal*”, y se le postulan fines y usos de manera amplia y, en mucho, coincidente. Entre ellos: identificación de prioridades, empoderamiento o fortalecimiento de ciudadanía, facilitación de cambios relacionales, generación de acciones contextualizadas, seguimiento y vigilancia de la gestión pública, y transformación cultural.

REFERENCIAS A LA NOCIÓN DE PARTICIPACIÓN
<p>De Cero a Siempre (Colombia, 2016)</p> <p>Plantea la ejecución de acciones de <u>participación y movilización social</u> que propendan por la identificación de prioridades, la generación de transformaciones culturales y la priorización de la protección integral de las niñas y niños de este grupo etario en las fases de implementación, las líneas de acción y las funciones de entidades (Colombia, 2016; art. 8, 9 y 15).</p> <p><i>“Los ciudadanos podrán conformar veedurías... para participar en <u>el seguimiento y la vigilancia</u> de la implementación de esta política”</i> (Colombia, 2016; art. 24).</p> <p>“Ciudadanía y participación” fue definido como uno de los cinco <u>estructurantes de la atención integral</u> que asegura el adecuado desarrollo de las niñas y niños (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013, p. 141).</p> <p>Respecto de la <u>realización</u> de primera infancia más directamente relacionada con participación (<i>“Expresar sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos sean tenidos en cuenta”</i>) se manifiesta que <i>“a la fecha el país no posee información con datos cuantitativos para esta atención”</i> (Ibidem, 2020; p.26) ⁵. Consecuentemente, en la <u>línea estratégica</u> de movilización social se identifican como retos: <i>“identificar y fortalecer mecanismos de empoderamiento y participación de las comunidades en favor de la situación de las niñas, niños y adolescentes”</i> e <i>“Iniciar la construcción de la línea técnica frente a la participación de niñas y niños en primera infancia”</i> (Ibidem, pp. 175 y 176).</p>
<p>PNIA (Colombia, 2018) ⁶</p> <p>Se refieren avances en la construcción de un <u>marco legal e institucional para la garantía</u> del ejercicio de la ciudadanía juvenil (fundamentalmente, a través de la Ley 1622 de 2013) (p. 10) pero también <i>“se observa una gran limitación de medir la participación de niñas, niños y adolescentes, así como se evidencia una baja participación en los espacios que brinda la normatividad vigente”</i> (p. 24).</p> <p>Se explicita que las niñas, niños y adolescentes deben tener <i>“participación significativa acorde con sus capacidades y momento del curso de vida... y ejercicio de la ciudadanía como agentes de cambio y transformación social y cultural desde la diversidad”</i> (p. 26).</p> <p>La <i>“construcción de la identidad”</i>, <i>“el ejercicio de la ciudadanía y la formación democrática”</i> se relacionan con el <u>entorno comunitario y espacio público</u> (p. 38).</p> <p>Entre las apuestas estratégicas de la PNIA, orientadas a <u>asegurar la atención integral</u>, se propone <i>“Fortalecimiento de la participación y las capacidades ciudadanas de niñas, niños y adolescentes en los diferentes entornos donde transcurren sus vidas”</i> (p.36). Por ello, una de las 4 <u>líneas de acción</u> de la política es <i>“(iii) Participación, movilización y ciudadanías”</i> ⁷ (p. 42) que incluye promoción de la participación significativa de NNA en todos los escenarios sociales, culturales, políticos y familiares a través de la formación para la ciudadanía, la comunicación para el desarrollo y la incidencia política (p. 43).</p>
<p>PPNAFF (Colombia, 2018)</p> <p><i>“Los procesos participativos constituyen un principio de <u>acción transversal</u> desde la formulación de la política y para la generación de apuestas contextualizadas en los territorios, orientadas al reconocimiento de las familias como sujetos colectivos de derechos, con capacidades y posibilidades de agenciamiento y transformación”.</i> (p.18)</p>

⁵ Las realizaciones son las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño, y que hacen posible su desarrollo Integral. (Art. 4. Ley 1804 de 2016).

⁶ Siendo la Convención de los Derechos del Niño – CDN (ONU, 1989) un referente básico de las políticas de niñez, resulta pertinente precisar que, según lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la CDN, en función de la edad y la madurez, los niños tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan (ya sea directamente o por medio de un representante) así como a ser escuchados, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y a desempeñar un papel activo en los procedimientos.

⁷ Las 4 líneas de acción de la PNIA son: (i) fortalecimiento institucional, (ii) calidad y pertinencia de las atenciones, (iii) Participación, movilización y ciudadanías y (iv) seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento.

Entre los principios de la política se presentan el Pluralismo: “En la promoción de espacios de inclusión y participación de las familias como ejercicio democrático de los derechos” y la Participación: “Las familias participarán en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan su desarrollo integral.” (p.19)

Ejes centrales para el cumplimiento de los objetivos de la PPNAFF: (i) Reconocimiento y protección social, que atañe al reconocimiento de la diversidad y pluralidad familiar, a la protección laboral o productiva y a la atención integral para la calidad de vida de las familias. (ii) Convivencia democrática: se orienta a las relaciones al interior del grupo familiar... “fundadas en el reconocimiento de la autonomía, el respeto, la confianza y la participación” (p. 21) y a la participación externa de las familias “en el diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos y servicios” (p. 22). y (iii) Gobernanza: asociada a estructuras y procesos de intercambio y coordinación entre actores políticos y sociales, se propone el desarrollo de estrategias de participación y control social en la implementación y seguimiento de la política (pp. 22 y 23)⁸.

Si bien las políticas públicas de niñez y familia hacen explícito su interés y alta valoración de la participación como un elemento estructural y estratégico, a la par se refiere que, sobre el particular, no se cuenta con información ni desarrollos⁹. Por tanto, frente al tema de participación se mantienen como retos la construcción de líneas técnicas, la implementación de mecanismos, la proyección de resultados, así como de elementos concretos para su valoración, en el marco de gestión de las políticas públicas de niñez y familia.

2.3 Referencias a participación familiar

Lo que se connota como participación familiar en los textos de las políticas públicas de niñez y familia, permite develar y contrastar comprensiones sobre el sujeto, así como el alcance y sentido de la acción participante. Respecto de las familias se hace evidente la percepción de capacidades que subyace; respecto de la participación resulta notoria la práctica unidireccional y sin mayor incidencia que se propone.

REFERENCIAS A PARTICIPACIÓN FAMILIAR

De Cero a Siempre (Colombia, 2016)

⁸ Precisamente en el artículo 3 de la Ley 1361 de 2009, se define la participación como uno de los principios de aplicación, así: “inserción de las familias en los procesos de construcción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo a sus vivencias y necesidades”.

⁹ Con excepción de la construcción del marco legal general de participación y de la norma específica que constituye el estatuto de ciudadanía juvenil.

No se alude de manera específica a “participación familia”. No obstante, las familias hacen parte así:

“La política... representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre... las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad. (art. 2)

“La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre se deberá implementar sobre el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad, por medio de planes, estrategias y acciones que aseguren la atención, la protección y el desarrollo integral de los niños y niñas”. (art. 22).

Propone disponer acciones de formación y acompañamiento a las familias para afianzar vínculos afectivos, para propiciar entornos con participación significativa de los niños, y para profundizar su responsabilidad en la prevención de riesgos y en la eliminación de situaciones de vulneración (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013. P. 40).

Refiere la participación familiar y comunitaria en la atención de los niños y niñas, como un antecedente importante en el desarrollo de servicios de cuidado (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013; pp. 57 y siguientes).

“las niñas y los niños ingresan a la sociedad en condiciones específicas de existencia por medio de la familia” (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013; pp.116 y siguientes).

PNIA (Colombia, 2018) ¹⁰

“Para esto, se requiere que el Estado, la familia y la sociedad, como corresponsables en la garantía de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, se relacionen con ellos reconociendo su capacidad de incidir en el entorno y de ejercer sus derechos, más allá de la prestación de servicios”. (p.26)

“rol como corresponsables, en conjunto con la sociedad y el Estado, de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes”. (p.26)

“El reconocimiento de la responsabilidad estatal y la corresponsabilidad junto con la familia y la sociedad para la generación de condiciones que favorezcan el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes” (p.32)

“La salud y la nutrición de las niñas, niños y adolescentes deben garantizarse desde el comienzo y a lo largo de toda la vida con participación activa de sus familias, respetando su contexto y cultura.” (p.33)

“Las familias, padres, madres, cuidadores, instituciones y comunidades tienen la capacidad de fomentar su participación y escucha en la vida cotidiana y con incidencia en la toma de decisiones.” [refiriéndose a las realizaciones de los niños] (p.34)

PPNAFF (Colombia, 2018)

“Las familias... son agentes corresponsables de los derechos de sus integrantes y mediadoras con el Estado y la sociedad para su garantía” (p.10)

“las familias tienen derecho a... la participación y representación de sus miembros.” (p.12)

“En cuanto a la participación social de las familias en los procesos de incidencia política, se han presentado experiencias en escenarios de control social y veeduría, desde la participación individual de sus integrantes. En especial, la participación social de las mujeres como cabeza de familia ha sido importante en las transformaciones

¹⁰ Conforme a lo planteado en el Manual de Aplicación de la CDN (Unicef, 2001), en este instrumento normativo no se consagra el derecho a la autodeterminación de la niñez, sino el de su participación en la toma de decisiones, así como su progresiva autonomía. En lo relativo a familia la CDN (ONU, 1989), el preámbulo alude a la familia como “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros” e indica que “debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. En los artículos 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16 y 18 se menciona el necesario respeto por los derechos y deberes de los padres o de la familia ampliada como partes interesadas, así como los límites para la intervención del Estado.

de condiciones de vida y en el acceso a servicios de salud, educación y vivienda, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas... ”” (p.17)

“Protección integral. El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, en corresponsabilidad con la sociedad, deben brindar protección a la familia desde lo administrativo, socio - económico y legal... Corresponsabilidad. Los sectores, público, privado y la sociedad compartirán y concertarán responsabilidades para desarrollar acciones articuladas que protejan a la familia y potencien su desarrollo integral. Participación. Las familias participarán en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan su desarrollo integral.” (p.19)

Para efectos de la gestión territorial de la política se propone flexibilidad para ajustarla a las condiciones de los territorios y se indica que *“debe primar la construcción participativa en la comprensión y análisis de situación, dando un papel protagónico a las familias como sujetos de los procesos estatales y públicos orientados a su fortalecimiento”,* que se debe *“promover y sostener la participación protagónica de las propias familias en la definición de las acciones a desarrollar”* (p. 27). De manera coherente con esta propuesta, la *“Participación y movilización social”* se define como un proceso transversal de base en la *“formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y servicios dirigidos al reconocimiento y fortalecimiento familiar”* (pp. 28 y siguientes).

En las políticas de niñez y familia, la reiterada alusión a la *corresponsabilidad* como principio orientador pareciera usarse con alcances y significaciones distintas. Mientras que, en general, en las políticas de niñez (incluida la de primera infancia) se plantea la corresponsabilidad para indicar los deberes de las familias respecto de las niñas, niños y adolescentes (generación de condiciones y gestión de atenciones, en especial, vinculación afectiva, educación, salud, nutrición, etc.); en la política de familia se plantea como la responsabilidad compartida y simultánea del Estado y la sociedad con fines de protección integral del conjunto del sistema familiar y sus integrantes. Es decir, que antes que denotar obligaciones para la familia, indica garantías para su ejercicio de derechos.

De igual manera, si bien en las políticas de niñez se evidencia una clara determinación para reconocer el papel protagónico de las familias y su participación estratégica en función de asegurar el desarrollo de los niños, cuando se alude a la noción de familia como *“sujeto colectivo de derechos”*, pareciera entenderse como destinataria de obligaciones y de requerimientos de solución (en muchos casos, ante la insuficiencia o ineficacia de garantías desde el Estado y la

sociedad) pero no, a la vez, como sujeto con exigibilidad de garantías para ejercer derechos y funciones, como se plantea en la política nacional de familia.

Más allá de considerar la autodeterminación progresiva que refiere la CDN (ONU, 1989), la promoción y apertura hacia la participación en las políticas de niñez tiene un manejo diferente cuando se gestiona respecto de las niñas, niños y adolescentes que cuando se gestiona respecto de las familias. En este caso, cuando se alude a la promoción y apertura hacia la participación de las familias, se asume como una acción estratégica pero prescriptiva y en beneficio de ciertos integrantes (los niños, niñas y adolescentes), no como un fin que involucre y defina el sujeto colectivo, ni que se revierta en su beneficio conjunto. Esto es, no en términos del propio ejercicio de derechos desde el titular supuestamente reconocido, como sí se pretende en la política nacional de familia.

De hecho, a pesar de aludirse a las familias como sujetos colectivos e interlocutores válidos, en general, tanto en las políticas nacionales de niñez como en la de familia, se presenta como “*participación familiar*” aquella participación individual de integrantes de las familias (en la mayoría de los casos, mujeres o de quienes ostentan la “*jefatura de familia*”) sin mayores consideraciones.

3. Algunas consideraciones técnicas sobre participación y participación familiar

La participación hace referencia al ejercicio voluntario de acción y organización de los sujetos con el fin de intervenir o incidir en decisiones sobre asuntos de interés público o situaciones que los afectan como individuos o colectividades.

La participación en un derecho de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que conlleva deberes para el Estado: abstenerse de impedir su libre ejercicio, evitar interferencias o afectaciones

desde autoridades públicas o particulares, y garantizar el desarrollo y protección de las diversas formas de participación (Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2015).

Sherry Arnstein en 1969 y Roger Hart en 2001 (citados por Flor y Sáenz, 2018) son, quizás, los autores de modelos explicativos de la participación más reconocidos, en los cuales se distingue entre formas falsas o solo aparentes de participación y aquellas que verdaderamente conducen hacia el empoderamiento y control ciudadano.

En las “*formas falsas*” de participación se utiliza a los sujetos para decorar, para entregar recursos, insumos, seguir instrucciones o ejecutar acciones, sin que haya incidencia o, al menos, devolución abierta y efectiva sobre la manera en que sus propuestas u opiniones influyen o no en las decisiones. Se trata de formas de manipulación, desahogo o información unidireccional.

Entre las segundas, es decir las denominadas “*formas verdaderas*” de participación, se encuentran: la consulta, la colaboración, la delegación de poder, la asociación y el control ciudadano. Siendo así, la profundidad del proceso participativo se puede acentuar o aminorar según la cantidad y calidad de la información a la que se accede, el control e influencia efectiva en el proceso de toma de decisiones y la posibilidad de co-creación o trabajo conjunto con otros actores y con el Estado.

Por otra parte, según el objetivo que se busque alcanzar, el ejercicio del derecho a la participación puede favorecerse en cualquier momento del ciclo de la gestión pública (planeación, implementación, seguimiento y evaluación), siendo importante asegurar que el objetivo, el alcance y la forma de participación sean claros para los participantes.

Ahora bien, referirse a la noción de participación familiar puede tener dos connotaciones, no necesariamente excluyentes, sino complementarias: (i) Una interna: la participación EN la familia, la dinámica propia del sistema familiar, que alude a las formas de relacionamiento entre sus

integrantes; y (ii) Una externa: la participación DESDE la unidad familiar, en interrelación e interlocución con los agentes del contexto y del entorno. En la estructura de gestión prevista en la PPNAFF (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018), la primera puede asociarse con el eje de convivencia democrática y la segunda con el eje de gobernanza.

En todo caso, al abordar el tema de la participación familiar, desde la institucionalidad debe tenerse presente que se trata de la interlocución no solo con sujetos individuales (cada integrante de la familia particularmente considerado) sino también con sujetos colectivos (cada grupo familiar). Para ello, resulta interesante revisar algunas consideraciones a partir de las ideas propuestas por Gurutz Jáuregui (2001):

La primera, es la *posibilidad de ejercicio individual o colectivo de derechos*. Esto es, que si bien, por definición, los derechos humanos son universales, existen varios cuya realización se da en forma individual (es el caso del derecho a la vida y a la libertad de pensamiento), mientras que otros derechos solo es posible ejercerlos en forma colectiva (como el derecho a asociación, a huelga, a participación política).

La segunda, es la *existencia de derechos de titularidad colectiva*, con exigibilidad de protección y garantía para los individuos que integran un grupo determinado. Los denominados “*derechos de tercera generación*” están basados en la cooperación y la solidaridad, en el reconocimiento de deberes respecto de otros individuos y de la comunidad ¹¹. En tal sentido, si bien el “*tener una familia y no ser separado de ella*” se predica como derecho de ejercicio individual, el

¹¹ En el proceso el reconocimiento de principios inherentes a la condición humana, aquellos derechos de segunda generación son los de carácter económico, social y cultural, y los derechos de tercera generación, aquellos atinentes a las libertades civiles y políticas. Entre éstos últimos se encuentran el desarrollo sostenido, la autodeterminación de los pueblos, la paz, el patrimonio común de la humanidad, a disfrutar la propia cultura, lengua, educación y práctica religiosa, el control de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

“reconocimiento y garantía de protección de la familia” por parte de la sociedad y el Estado comprende un derecho común, ejercido por un colectivo.

La tercera consideración puede asociarse con una noción fundamental para la comprensión de la familia como sistema complejo: la *“unidad familia – persona”*. Ya en el documento técnico contentivo del amplio proceso de construcción social que precedió a la consolidación de la PPNAFF (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) se había identificado éste como uno de los desafíos más importantes: *“la articulación entre la titularidad de los derechos de la familia y la titularidad de los derechos de sus integrantes”* (P. 27). Dicho de otro modo, el reto de proteger a la familia a la vez que se garantiza la libertad y autonomía de todos los individuos pertenecientes al grupo.

Finalmente, también es importante distinguir entre participación delegada o participación directa, según exista o no intermediación para el ejercicio de expresión. La participación delegada opera en muchas ocasiones por razones de practicidad y eficiencia, e implica como aspecto fundamental: la legitimación de la representación. Esto es, que se actúe conforme a los acuerdos y límites de la delegación recibida. Tratándose de participación directa en la familia habría que convocar y escuchar, preferiblemente de manera amplia y simultánea, todas las voces de los integrantes en conjunto. Mientras que, cuando se trata de participación delegada, para que uno o varios integrantes de la familia puedan representar de manera real y legítima los intereses de los otros, se haría necesario organizar y realizar un proceso de acuerdo previo de manera que, vía concertación y consenso, se pueda construir la voz colectiva y precisar los alcances de la delegación.

4. La dimensión relacional: Reconociendo la proyección existente entre lo común y lo específico

Las políticas para las familias (nacionales y territoriales) comparten población con otras tantas organizadas por segmentos de grupos etarios específicos (primera infancia, niñez, juventud, vejez) y, conforme a los enfoques que adopten, pueden asumir el género como categoría de análisis, en tanto construcción y expresión de identidad, pero también como perspectiva para reconocer la diversidad y construir relaciones equitativas.

La diversidad y pluralidad de las familias, en tan variados sentidos, constituyen desafíos constantes para el aseguramiento de la universalidad efectiva en el ejercicio de derechos, del que deben dar cuenta las políticas públicas.

Frente a tales retos, al asumir la dimensión relacional, las políticas de familia pueden configurar abordajes integradores y contextualizantes, que permitan visualizar la confluencia de géneros y la dinámica de las generaciones, superar la fragmentación o focalización en integrantes individuales, y considerar en su conjunto el recorrido de las interacciones y las condiciones de vida para el desarrollo humano de todos y cada uno.

Ahora bien, a partir de lo develado en el análisis de contenido expuesto, resulta evidente que desde la institucionalidad se deben precisar modos y condiciones para garantizar, promover, proteger, cualificar, documentar y evaluar el cumplimiento del derecho de las familias a intervenir efectivamente en las decisiones que les afectan, en tanto sujetos colectivos, plurales y diversos, y como titulares capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Asunto que constituye un deber para el Estado y que, por tanto, sería recomendable desarrollar en el marco de la armonización de la gestión territorial de las políticas públicas, entre ellas las de niñez y familia.

De manera complementaria, a partir de la revisión realizada también es posible resaltar algunos elementos, plantear inquietudes y hacer observaciones sobre otros aspectos relacionados:

- Promover una “*cultura de participación*”, asumirse ciudadano y hacer parte en la gestión de lo público, es un asunto que, si bien para ganar pertinencia puede organizarse atendiendo especificidades de grupos poblacionales o etarios, debe partir y hacer evidente una base común y continua, que atañe a la dignidad del ser humano a lo largo de todo curso vital, no segmentada ni sustitutiva, sino sensible, relacional e incluyente.
- En los documentos de fundamentación de la política nacional de primera infancia, se plantea un antecedente importante de participación familiar y comunitaria incidente en el desarrollo de servicios de cuidado (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013; pp. 57 y siguientes). Resultaría interesante explorar más y mejor estos precedentes para identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas, así como posibles retrocesos y oportunidades de mejora.
- En una clara alusión a la presuntamente superada división entre lo privado y lo público, al definir los entornos en las políticas de niñez se asocia la familia con el entorno hogar, y el ejercicio de la ciudadanía y la formación democrática con el entorno comunitario y de espacio público. Para efectos de los desarrollos subsiguientes, se considera conveniente revisar los supuestos que subyacen y sus implicaciones.
- Se juzga pertinente resaltar un hecho simple pero importante al que alude la PNIA y que en la práctica de la gestión reciente pareciera pasar desapercibido. Esto es, que en las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF confluye la gestión territorial tanto de las políticas de niñez como de familia. Disposición que debe servir para conjugar esfuerzos.

- Conforme a lo presentado, en los fundamentos de la política nacional de primera infancia se reconoce que *“las niñas y los niños ingresan a la sociedad en condiciones específicas de existencia por medio de la familia”* (Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, 2013, p 40). Y, como se ha anotado, respecto de la política nacional de familia, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 – 2022, p. 25y y 442) se indica expresamente que *“Esta política debe fortalecer a las políticas desde la infancia a la juventud”*. Por ello, llama la atención que en el mismo documento de bases del PND (p. 243), se aluda a la noción de *“pobreza infantil”* (aclarando en pie de página que *“Se entiende por infantil el rango de edad de los 0 a los 17 años”*) y se disponga que se *“construirá una estrategia para la superación de la pobreza infantil”* en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF. Se considera que este tema (el de la pobreza) también debe abordarse de manera más compleja, relacional e incluyente, en el marco de las políticas poblacionales, sociales y económicas.

5. Asumir en propiedad la Unidad Familia – Persona: Recomendaciones para asegurar su participación en la gestión de políticas públicas

Las políticas públicas constituyen criterios y cursos de acción que, teniendo en cuenta unas consideraciones y un análisis de contexto determinado, se despliegan para alcanzar los fines del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones. De esta manera, a partir de una postura ideológica, se conjugan objetivos, modos y recursos.

Siendo así, también la participación familiar tiene un importante componente de facilitación de condiciones y favorecimiento de pautas desde la institucionalidad. Pasa por reconocer e incluir a las familias, de manera explícita, como parte de los grupos de interés, identificando sus

características, aspiraciones, situaciones y contextos. Pero el reconocimiento formal de las familias como sujetos colectivos y agentes de cambio no es suficiente.

Si bien el lenguaje construye realidades y las representaciones abren opciones, las “declaraciones oficiales” de las políticas sirven, pero no bastan. Se necesita llenarlas de contenido, traducirlas en prácticas coherentes, significativas, que no refuten lo declarado; modificar no solo la forma de referir o expresar, sino también de relacionarse e interactuar con los reconocidos “*sujetos colectivos, diversos y capaces*”.

En tal sentido, lo visibilizado en el presente artículo da pie para recomendarle a las instituciones, autoridades administrativas y ejecutores de políticas públicas, la revisión rigurosa de la coherencia interna entre las concepciones oficialmente declaradas sobre familia y participación, y sus propuestas de acciones de implementación de políticas, así como las metas propuestas o resultados esperados (Esto incluye: actividades, metodologías, tiempos, recursos, unidades de análisis, productos, etc.).

Si bien la armonización entre políticas poblacionales puede partir del reconocimiento de las familias y sus integrantes como sujetos titulares de derechos (entre ellos, el de participación); es necesario que, tanto en las instancias centrales de gestión de las políticas públicas de niñez y familia, como en las territoriales, se haga un esfuerzo para acordar no solo palabras, sino sentidos, y avanzar en la identificación e integración de los objetivos, actividades y actores coincidentes o que se intersecan, con el fin de conciliar y concertar acciones conjuntas y colaborativas en relación con asuntos de interés común. Para ello, es necesario que se superen las miradas aisladas, las pragmáticas individualistas y las soluciones excluyentes; así como la fragmentación y las relaciones de competencia en el uso de los recursos y en la implementación de estrategias y servicios.

Esto implica, a su vez, que desde el orden nacional se depuren, unifiquen y organicen de manera equilibrada, clara y coherente las demandas y asignaciones dispuestas para los territorios sobre las políticas poblacionales.

Respecto del ejercicio participativo, reviste importancia visibilizar condiciones básicas que la institucionalidad debe garantizar a los individuos y a las colectividades. A saber:

- Disponibilidad y acceso, real y sin barreras, a información de carácter público suficiente, organizada y actualizada¹².
- Convocatoria amplia y abierta, con facilidades de modo, tiempo y lugar para que sea atendida.
- Creación de instancias o escenarios de participación, así como promoción y acceso para el uso efectivo de los mecanismos y las herramientas.
- Apertura y acogida frente a la escucha, a la expresión libre de opiniones, peticiones y voluntades; disposición al diálogo, al intercambio de puntos de vista y a la concertación.
- Efectiva consulta, incidencia y prevalencia de las opiniones de los sujetos en las decisiones sobre los asuntos que les afecten o les puedan llegar a afectar.
- Realimentación sobre resultados y repercusión de las acciones de participación en términos de los intereses y derechos.
- Fomento del uso de los espacios sociales, culturales, políticos, y económicos existentes en el territorio, para la expresión de opiniones, el relacionamiento con otros y la organización en redes o colectivos con miras a la deliberación, el involucramiento y la incidencia en asuntos de interés.

¹² La accesibilidad efectiva implica reconocer la existencia de familias y grupos poblacionales que por sus condiciones y características particulares (étnicas, trascurrir vital, género, discapacidad, ruralidad, etc.) requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y obrar en consecuencia, facilitando la disponibilidad y fortaleciendo a los sujetos para garantizar su acceso y aprovechamiento.

- Construcción de una “*cultura de participación*” a partir de la constante búsqueda y composición de consensos como principio de actuación general. Darle tiempo y lugar a la expresión e inclusión de la diferencia, en lugar de la imposición de verdades o mayorías.

En particular, para el logro de la participación familiar, se recomienda a la institucionalidad:

- Apoyar a las familias en su proceso de autorreconocimiento como sujetos colectivos con capacidad de agenciar su propio desarrollo, e incluirlas de manera intencionada en escenarios de formación ciudadana que fortalezcan sus capacidades de autodeterminación, sus estilos de relacionamiento y decisión, así como sus posibilidades para hacer incidencia y control social.
- Desplegar esfuerzos para promover con las familias modos de relacionamiento interno que faciliten la construcción de voces colectivas y representatividades legítimas, a partir de procesos participativos de consenso entre los integrantes de los sistemas familiares, procurando acciones intencionadas de solidaridad, empatía, comunicación y cuidado del otro.
- Asegurar condiciones que favorezcan la construcción de opiniones genuinas e informadas, la expresión libre de las mismas, así como el relacionamiento o asociación entre familias, que hagan más efectiva la incidencia en las decisiones y la exigencia de protección a sus derechos.

- Desarrollar investigación aplicada en torno a la identificación y manejo de aquellas situaciones o condiciones que puedan impedir, debilitar o favorecer que las familias incidan en las decisiones públicas que les afectan¹³.

Finalmente, también se recomienda compartir estas conclusiones y reflexiones con familias, comunidades, y agentes nacionales y territoriales responsables de la gestión de las políticas públicas.

¹³ Reconocer condiciones y características particulares de familias y grupos poblacionales (por ejemplo: familias con niños, niñas o adolescentes, pero también familias con adultos mayores o que cuentan entre sus integrantes con personas con discapacidad; dinámicas familiares en la asignación de roles de cuidado; realidades en términos de tiempos laborales y tiempos familiares; diversidad en temas de género, pertenencia étnica, ruralidad, etc.), con el fin de identificar aprendizajes y promover el desarrollo de buenas prácticas.

6. Fuentes consultadas

6.1 Referentes sobre metodología

Andréu Abela, Jaime. (2002). *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*. Sevilla, España. Fundación Centro de Estudios Andaluces. Recuperado de: <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>

Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. [Online]. México: Mac Graw Hill. Recuperado de: <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

6.2 Referentes sobre participación

Flor, E. y Sáenz, A. (2018). “La participación como eje central del desarrollo”. En *Estudios de la Gestión: revista internacional de administración*, No. 4 (julio-diciembre de 2018). Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador. Recuperado de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/download/723/1024?inline=1>

Jáuregui, Gurutz (2001). “Derechos individuales versus derechos colectivos: una realidad inescindible”, en *Una discusión sobre derechos colectivos*, editado por Francisco Javier Ansuátegui Roig, 47-66. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid: Editores Dykinson.

6.3 Documentos objeto de análisis de contenido

Colombia. Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia. (2013). *Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión*. Colombia. [Online]. Recuperado de: <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Fundamentos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf>

Colombia, Congreso de la República (2016). *Ley 1804 de 2016; Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1804_2016.html

Colombia. Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. (2020). *Informe de la Implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero A Siempre Vigencia 2019*. Colombia [Online] Recuperado de: <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Informe-Politica-DIPI-2019.pdf>

Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2018). *Política Nacional De Infancia Y Adolescencia 2018 - 2030*. Colombia. [Online]. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/politica_nacional_de_infancia_y_adolescencia.pdf

Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). *Política Pública Nacional De Apoyo Y Fortalecimiento A Las Familias*. Documento ejecutivo. Colombia. [Online]. Recuperado de: https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/3311.pdf

6.4 Documentos complementarios y de contexto

Colombia, Congreso de la República (1991). *Constitución Política de Colombia*. Colombia. [Online]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>

Colombia, Congreso de la República (2006). *Ley 1098 de 2006; Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Colombia, Congreso de la República (2009). *Ley 1361 de 2009; Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1361_2009.html

Colombia, Congreso de la República (2013). *Ley 1622 de 2013; Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html

Colombia, Congreso de la República (2015). *Ley 1757 de 2015; Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.html

Colombia, Congreso de la República (2019). *Ley 1955 de 2019; Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”*. Colombia. [Online]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html

Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2019). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”*. Colombia. [Online]. Recuperado de: <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx>

Colombia, Consejo de Estado, S. T. (2013). *Sentencia del 11 de julio de 2013, (Exp. 19001-23-31-000-2001-00757-01)*. Colombia. [Online]. Recuperado de: [https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/19001-23-31-000-2001-00757-01\(31252\).htm](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/19001-23-31-000-2001-00757-01(31252).htm)

Colombia, Corte Constitucional (2015). *Sentencia C-150 de 2015.* Colombia. [Online]. Recuperado de: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71104>

Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). *Política Pública Nacional De Apoyo Y Fortalecimiento A Las Familias Colombia, 2012 – 2022.* Documento amplio. Colombia. [Online]. Recuperado de: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CBA649DA5EBF221205257BF1007B8494/\\$FILE/APolitica Publica Familias Colombianas 2012 2022 \(1\).pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CBA649DA5EBF221205257BF1007B8494/$FILE/APolitica%20Publica%20Familias%20Colombianas%202012%202022%20(1).pdf)

Naciones Unidas, A. G. (1989). *Convención de los Derechos del Niño.* [Online]. Recuperado de: https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_derechos_nino.html

Naciones Unidas, Unicef (2001). *Manual de Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.* Hodgkin, Rachel y Newell, Peter. Ginebra, Atar Roto Presse.

Apéndice A: Referencias sobre noción de Familia, Participación y Participación familiar, identificadas en las Políticas Públicas Nacionales de Niñez y Familia

Unidad de Análisis	Políticas Públicas Nacionales		
	Primera Infancia	Niñez y Adolescencia	Familias
Noción de Familia	<p>Sujeto colectivo de derechos</p> <p>Actor social central</p> <p>Diversidad de configuraciones</p> <p>Sistema dinámico</p> <p>Unidad con autodeterminación</p> <p>Mediadora de inclusión social</p>	<p>Sujeto colectivo de derechos</p> <p>Agente político con capacidad transformadora</p> <p>Pluralidad y diversidad</p> <p>Red de relaciones y vínculos primarios</p> <p>Unidad</p> <p>Asociada con el entorno hogar</p>	<p>Sujetos colectivos de derechos</p> <p>Agentes transformadores con capacidad de agencia/ Interlocutores activos</p> <p>Plurales y diversas</p> <p>Sistemas vivos: autorregulación y desarrollo / Redes de vínculos</p> <p>Unidad Familia - Persona</p> <p>Estructura social</p>
Noción de Participación	<p>Derecho y realización de derechos de niños y niñas</p> <p>Estructurante de la atención integral de niños y niñas</p> <p>Reto de la línea estratégica de movilización social</p> <p>Acciones o medios para lograr objetivos</p> <p>Función de entidades</p> <p>Seguimiento y vigilancia</p>	<p>Derecho en un marco de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, acorde con capacidades y curso de vida</p> <p>Base para el ejercicio de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Garantía para la atención integral de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Objetivo y Línea de acción</p> <p>Acción que puede ser o no significativa</p> <p>Asociada con el entorno comunitario y espacio público</p>	<p>Derecho y ejercicio de derechos del sujeto colectivo</p> <p>Principio, objetivo y medio en garantía de derechos de familia e integrantes</p> <p>Acción transversal</p> <p>Asociada a ejes centrales de convivencia democrática y gobernanza</p> <p>Control social y seguimiento</p>
Participación Familiar	<p>Corresponsabilidad como principio base</p> <p>Medio para la garantía de los derechos de niñas y niños</p> <p>Acciones de formación y acompañamiento en beneficio de niñas y niños</p> <p>Responsabilidad asociada a brindar condiciones específicas de existencia</p> <p>Recurso para el desarrollo de servicios de cuidado para niños y niñas</p>	<p>Corresponsabilidad en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Participación en la garantía de salud y la nutrición de niños, niñas y adolescentes</p> <p>Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes</p>	<p>Derecho de las familias / protección a la familia</p> <p>Corresponsabilidad de los derechos de sus integrantes /Mediación con el Estado y la sociedad para garantía de derechos /Representación de sus miembros</p> <p>Papel protagónico del sujeto colectivo en los procesos que promuevan su desarrollo integral /Participación individual de sus integrantes (en especial de las mujeres)</p> <p>Flexibilidad hacia lo territorial a través de construcción participativa</p> <p>Proceso transversal de base /Control social y veeduría</p>